

19 de octubre del 2023

Este domingo 22 de octubre se decide, en primera instancia, el futuro de nuestra Patria. Desde el Centro de Estudios de Desarrollo y Territorio queremos expresar nuestra profunda preocupación por los factores que entran en juego en esta particular elección.

Contexto

La Argentina atraviesa una crisis de divisas que tiene un impacto directo en el valor de nuestra moneda y, por ende, en el poder adquisitivo de los salarios de todos los y las argentinas. Esto llevó al crecimiento de la pobreza por ingresos de la población y al deterioro de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, cuya supervivencia, sin el rol central del Estado para la minimización de los efectos de la crisis, se encuentra altamente amenazada.

En este contexto, surgen varias interpretaciones respecto a las causas de la crisis y las políticas necesarias para su superación. Por un lado, hay dos grandes sectores representados por los proyectos de **La Libertad Avanza, con Javier Milei** a la cabeza, y de **Unidos por el Cambio, con Patricia Bullrich** como candidata, que arrojan las causas de la crisis al desequilibrio fiscal en las cuentas del Estado, producto de un gasto social “demasiado elevado” frente a la recaudación impositiva. Es decir, **según ellos el problema es que el Estado invierte demasiado en políticas sociales** destinadas a la totalidad de la población, **pero no ponen como factor determinante la gran evasión de impuestos y la fuga de capitales** por parte de los sectores más privilegiados de la economía argentina que comprometen los ingresos del Estado, y por lo tanto la masa de dinero disponible para la inversión en políticas sociales y estratégicas. Asimismo, **ambos sectores deciden evitar la consideración de la elevada deuda externa en el desequilibrio de las cuentas**, particularmente con el **Fondo Monetario Internacional** como acreedor de la deuda más grande en la historia de nuestro país, conformada durante la gestión de Mauricio Macri como presidente de la Nación. Esta deuda implica, no solamente pagos periódicos en dólares a esta entidad financiera, sino también la condición de cumplir con determinadas medidas impuestas por el Fondo a la gestión económica de Argentina, **condicionando fuertemente las capacidades del gobierno nacional para incidir en la crisis actual.**

Frente a esta situación, fue creciendo exponencialmente la opción política representada por **Javier Milei** con su **proyecto de reducción del Estado, privatización compulsiva de empresas y recursos nacionales, desregulación de la economía y, particularmente, del mercado de trabajo, la mercantilización de lo que hasta hoy son derechos, como la salud y la educación**, y lo que resulta aún más preocupante: **la eliminación del Banco Central y la consecuente dolarización de la economía.** Pero...¿qué quiere decir todo esto?

El modelo libertario

Milei propone sin tapujos realizar un **ajuste económico aún más profundo que el que el propio FMI impone** al país, y el camino para lograrlo se compone de una serie de elementos que implican la destrucción de la soberanía de nuestro país, así como también de los derechos sociales y económicos que hasta hoy se encuentran garantizados. Sin embargo, es necesario aclarar cuál es la premisa que sostiene su visión. Según **Milei, lo que debe regular las relaciones entre las personas y los poderes económicos es el mercado**, o sea la **ley de oferta y demanda**. Esto quiere decir que, el único factor que incide en el precio, disponibilidad y, sobre todo, en la importancia social de las cosas, es cuánto hay de determinado bien o servicio y cuánto es requerido o demandado, obviamente con capacidad de pago. O sea, el valor de las cosas está determinado por cuánta gente puede pagarlo y qué oferta disponible existe de esto. **Dicho en criollo, los precios dependen solamente de cuánta gente puede pagar algo y cuantas empresas o inversores privados hay ofreciendo ese bien o servicio.**

Esta premisa es útil para analizar, hasta cierto punto, la dinámica de precios de bienes y servicios que no son esenciales para la vida, pero no es el único elemento a tener en cuenta a la hora de pensar el **valor real** de todos los aspectos que componen la economía y el bienestar social de un país. Para poner algo en claro, nosotros entendemos que **valor y precio** no son lo mismo. Recientemente, **Milei expresó que "Si no es rentable para el privado es porque no es deseable socialmente"**, esto quiere decir que **sólo es importante aquello que le genera ganancias a las empresas, sin considerar la importancia social** de, por ejemplo, la existencia de redes ferroviarias que unan al país o que faciliten la llegada a los lugares donde estudia y trabaja la población a precios que no sean privativos.

Esta visión cobra particular importancia cuando pensamos en la **educación o la salud**. El **sistema de vouchers** que propone La Libertad Avanza implica que todas las escuelas pasen a manos de empresas de gestión privada, dado que según esta fuerza, administran mejor los recursos. Sin embargo, siguiendo la lógica anterior, sólo es deseable aquello que genera ganancias para el capital, entonces, **¿qué pasa con las escuelas rurales o del interior del país donde asisten pocos alumnos por la cantidad de población que existe allí? ¿o con aquellas escuelas que reciben chicos de menores recursos y que no tienen capacidad de pago?** Según la lógica de mercado, si hay poca demanda, y además esa demanda no tiene capacidad de pago, la rentabilidad baja. Entonces, **¿qué empresas querrían invertir en gestionar escuelas que no generan ganancias?** En teoría, en estos casos se financiaría la educación con los famosos **vouchers**, que otorgaría el Estado directamente a las familias, para que abonen la cuota, pero... ¿todas las empresas educativas aceptarían invertir en colegios en los que recibirían mayoritariamente pagos en **vouchers**, sabiendo que no hay población con capacidad de pago acorde a las tarifas en los alrededores?, ¿con qué criterio se asignarían estos **vouchers**? ¿Serían aceptados en escuelas de gestión privada de buena calidad, o sólo en aquellas de menor nivel?. Esto sin contar que aquellos privados que optaran por invertir en colegios que hoy son públicos, deberían poner de su bolsillo dinero

para la infraestructura, los sueldos docentes, los insumos y la publicidad (como buen negocio) de la entidad educativa. **En localidades donde hay una baja matrícula y nula capacidad de pago**, en donde habría que invertir una gran cantidad de dinero para poner en funcionamiento el colegio y las perspectivas de pago fueran en gran proporción, sino en su totalidad, en *vouchers* del Estado, **la rentabilidad sería prácticamente nula**. Y recordemos, **“si no es rentable económicamente, no es deseable socialmente”**, por lo tanto las escuelas rurales y aquellas ubicadas en zonas de bajos recursos dejarían de ser *algo deseable*, y por lo tanto, no deberían existir.

Entonces, **¿qué valor tiene la educación de nuestros chicos? ¿Se le puede poner un precio a la posibilidad de forjar un futuro?**

Lo mismo ocurre en relación a la **salud**, **¿tiene un precio la vida de nuestros viejos que hoy reciben gratuitamente los medicamentos? ¿Tiene precio la vida de un bebé que nace con una cardiopatía y su familia no tiene dinero para pagar el tratamiento?** Este último caso es sintomático, dado que **Milei votó en contra de la promulgación de la ley de cardiopatías congénitas** que propone que el Estado se haga cargo del tratamiento en bebés que nacen con esta enfermedad y no pueden afrontar el pago.

Otro factor que pone en jaque la relación entre precio y valor, es la cuestión de las **empresas estratégicas del Estado** y los **recursos naturales** que pertenecen a la Nación y a las Provincias, o sea al pueblo argentino. La privatización de YPF y la explotación de Vaca Muerta implicaría, primero una pérdida de soberanía energética, o sea los recursos y sus ganancias pasarían a formar parte de la billetera de las grandes empresas transnacionales y no del Estado argentino (que somos todas y todos nosotros), impactando no sólo en la masa de dólares que ingresa en las cuentas del Estado, sino también en los precios que pagamos por el combustible y el gas. Recordemos, que hasta hace muy poco, Argentina importaba la mayoría del gas que se consume, y con la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner pasa a poder abastecer a casi la totalidad del país con gas propio, sin tener que destinar dólares a su importación. Nuevamente, **¿el precio de ganancia es igual al valor social?** E incluso, si pensáramos sólo en la ganancia, es imposible ignorar el hecho de que el precio internacional del petróleo subió desde la pandemia un 122,7%, y continúa aumentando, por lo que si resignáramos la soberanía de **YPF** mediante su **privatización** no sólo **pasaríamos a pagar precios más altos sino que también disminuiría las posibilidades de financiamiento del Estado**, fugando las ganancias a cuentas privadas en el exterior de las grandes empresas transnacionales. Otra cuestión que es imposible soslayar, es que el precio del petróleo determina el precio de la nafta, y éste el precio de todos los bienes y servicios que impliquen su transporte, como la comida y los productos básicos para la supervivencia, por lo que el aumento del precio de la nafta impacta necesariamente el aumento del resto de los precios de la economía. O sea, digamos, en la inflación.

Otro punto importante son los **recursos naturales, como reservas de agua, bosques y áreas protegidas**. La Libertad Avanza se opone a la creación y sostenimiento de los Parques Nacionales, los cuales además de tener una importancia enorme en la biósfera, implican ingreso de dólares debido al turismo ¿Si el problema es el ingreso de dólares, por qué se oponen? Quizás porque esperan que sus socios comerciales extranjeros puedan hacer negocios en zonas que hoy son protegidas y el Estado detenta su propiedad, sin importar el impacto ambiental y para las economías locales que tendría su privatización.

Asimismo, insisten en que el problema de la contaminación se basa en que los ríos, mares y áreas protegidas no son de propiedad privada, porque según Milei ¿por qué un privado contaminaría su propiedad? Pero, por ejemplo, si una empresa compra un área que contiene una reserva de agua dulce, pero su negocio es relacionado a la industria o a la explotación de recursos naturales, la ganancia estaría puesta en el crecimiento de su negocio, y no la preservación del ecosistema, ya que el negocio puede reinstalarse en cualquier otro punto del planeta y continuar, una vez que esa área se encontrara destruida o inhabitable, dejando el saldo ambiental de agua contaminada o tierras destruidas a nuestro país, o sea a todos nosotros.

Por último, el **broche de oro** del programa de Milei: la **eliminación del Banco Central y la dolarización de la economía**. Son **10 los estados del mundo que no tienen Banco Central**. En su mayoría, **territorios pequeños e islas con muy baja población**, con la excepción de Panamá, que no tiene autoridad monetaria y tiene más de 4 millones de habitantes. La lista también incluye a Kiribati, Tuvalu, Micronesia, Andorra, Islas Marshall, Isla de Man, Mónaco, Nauru y Palaos. De ese grupo de 10 países, hay al menos 4 que son considerados **paraísos fiscales**. O sea, son países que se dedican a la captación de dinero ilegal que los millonarios del mundo no quieren declarar para no pagar impuestos. Este punto es el nudo del **programa de (sub)desarrollo de Milei: un país sin industria propia, con salarios bajos sin regular y trabajadores sin derechos, cuya generación de dinero esté centrada en la captación de dólares de aquellos que escapan a la ley**. Un elemento importante a tener en cuenta es que **en el mundo gran parte de esa masa de dinero proviene del narcotráfico**, que por obvias razones no puede declarar sus ganancias, y de otros negocios espurios.

Por otro lado, la **dolarización de la economía**. Es innegable que hoy el dólar condiciona los precios de todos los bienes y servicios, así como de otras transacciones económicas, y la desvalorización del peso argentino frente a éste constituye un problema real para todos los argentinos. Sin embargo, es necesario poner de relieve qué cuestiones son necesarias para poder llevar adelante este programa y cuáles son sus implicancias.

Para poder dolarizar, hay que tener dólares. La clave de la crisis económica argentina está en la poca disponibilidad de dólares en las reservas, dado que el valor del peso depende de cuántos dólares haya para respaldar ese valor. Si hay pocos dólares y muchos pesos, el peso vale poco, cosa que sucede hoy. La dolarización implica que todos los pesos que haya en circulación se cambien por dólares, pero ¿si hay pocos dólares y muchos pesos, cuántos

dólares pasaría a valer tu salario? No es el equivalente actual del valor del dólar, sino que es necesario que el dólar valga mucho más para que alcance para reemplazar todos los pesos, no sólo de los salarios sino de todas las operaciones financieras y comerciales. **O sea: una brutal devaluación junto a la eliminación de la moneda nacional.**

Sólo hay tres países que adoptaron al dólar como moneda oficial: Zimbabwe, El Salvador y Ecuador. Sin embargo, sólo Ecuador adoptó al dólar como moneda oficial única, mientras que en El Salvador el dólar convive con una moneda local (el esquema de dos monedas en circulación con libre flotación que propone Patricia Bullrich) y Zimbabwe, que adoptó la divisa estadounidense como moneda única en 2009, pero luego abandonó ese régimen.

El Salvador tiene una población de 18,3 millones de personas, frente a Argentina que tiene casi 50 millones de habitantes. **Sin embargo, en Ecuador la desigualdad es un 2% mayor que en Argentina y un Índice de Desarrollo Humano 10% más bajo, teniendo una economía dolarizada y con menos de la mitad de habitantes, entonces ¿por qué éste sería el modelo a seguir** de un país con gran extensión territorial, reservas de recursos naturales disponibles, industria nacional y servicios públicos gratuitos a los que concurren personas de todo el mundo para utilizar? **La respuesta es simple: porque el objetivo no es la mejora en las condiciones de vida de la población argentina, sino en la rentabilidad económica de las empresas transnacionales.**

Asimismo, la **eliminación del Banco Central** argentino implica el **renunciamiento a toda posibilidad de política monetaria desde el Estado, quedando el destino económico del país atado a las decisiones de política económica de los Estados Unidos y sus intereses.**

La **apertura indiscriminada de las importaciones y la desregulación del mercado** tiene un **impacto directo en la industria nacional**, compuesta en gran parte por **PyMES**, que además de generar riqueza, generan empleo y bienes accesibles para la población. Las empresas nacionales no están en condiciones de competir en igualdad de condiciones frente a los grandes grupos económicos trans e internacionales. Un elemento que se suma a esto, es la propuesta de cortar relaciones con Brasil, China y Rusia, aliados comerciales estratégicos de la Argentina, y que los dos primeros representan mayoritariamente el mercado en el que nuestro país inserta los bienes que produce. Si abrimos las importaciones, liberamos la economía y cortamos relaciones con nuestros principales socios comerciales, **¿qué destino correrán las empresas locales?**

Todo el programa económico se encuentra además corolado por **el hilo conductor discursivo de La Libertad Avanza: la justicia social y la igualdad de oportunidades son aberraciones según el principal conductor de ese espacio. Esta declaración de principios sella el final del destino de los menos privilegiados de nuestro país:** la justicia y las posibilidades de crecimiento para ellos **son algo indeseable dentro de este programa.** El recorte en educación, salud, empleo público, ciencia, investigación, subsidios a la energía y el transporte impacta de forma directa en las posibilidades de vida de quienes menos tienen, cuya población no se espera que disminuya sino que crezca.

Entonces, **¿cuál es el modelo?** El **aumento de las ganancias de empresarios y grupos económicos extranjeros con el “costo” de la pauperización de la vida de las clases medias y pobres del país, sin políticas de contención ni desarrollo, con salarios aún más devaluados, sin derechos laborales, sin salud ni educación pública, sin inversión pública en investigación científica para el desarrollo nacional de vacunas, medicamentos, tratamientos, etcétera.**

Muchos dicen que Milei no tiene chances de poder llevar adelante todo esto, se olvidan de **una pata central de su programa: la represión y la prohibición de la protesta**, amparada hoy como derecho en nuestra Constitución Nacional. **La reivindicación de la última dictadura militar no es casual ni inocente**, es la antesala de la perspectiva de “seguridad nacional”, que será encarnada por Victoria Villarruel según declaraciones del candidato a presidente. La misma Victoria Villarruel que visitaba genocidas detenidos por haber cometido crímenes de lesa humanidad, quien defiende el derecho (hoy inexistente) a la libre portación armas, quien considera la lucha histórica por los derechos humanos, reconocida internacionalmente, un *curro* de nuestras Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, muchas de las cuales aún hoy desconocen el paradero de sus familiares detenidos desaparecidos por la última dictadura militar.

La temporalidad que enuncia Milei como el inicio de la decadencia argentina no es casual. **Si bien no se pone de acuerdo con él mismo, en si la decadencia en nuestro país lleva 40 años, o más de 100, la elección de esos períodos no es casual: hace 40 años recuperamos la democracia**, y salimos de la etapa más oscura de nuestra historia nacional, no sólo por el genocidio cometido contra nuestros propios compatriotas, sino por la irrupción salvaje de la valorización financiera en detrimento de la industria nacional. Según Milei, el gobierno del Dr. Raúl Alfonsín, que puso fin a un siglo de dictaduras alternadas, fue el inicio de la debacle del país.

En otras ocasiones, habla de una decadencia de más de 100 años. Recordemos cómo era el país, en ese entonces: oligarquía terrateniente dominante, trabajadores rurales sin jornada laboral, en muchas ocasiones sin salario (se pagaba con vales para gastar en las tiendas propias del empleador, o sea digamos, con *vouchers*), sin voto universal, secreto y obligatorio (mucho menos aún para las mujeres), suntuosos palacios frente a población empobrecida en el campo o en los conventillos, genocidio de pueblos originarios y reparto de sus tierras.

Nos queda la duda, ¿a qué modelo de país quiere volver Milei? ¿Al de la última dictadura cívico-militar o al de la Argentina sin voto, sin derechos y sin clase media?

En último lugar, no queremos dejar de mencionar nuestra extrema preocupación por los valores que representan a nuestra sociedad y que hoy se ponen en juego. **Creemos fuertemente que la solidaridad y la convivencia democrática son los pilares de nuestra Nación**, y que ésta se ve representada en la idea de **justicia social**. La Libertad Avanza pone en jaque, no sólo las condiciones de reproducción económica de nuestro país, sino **valores**



CEDYT
Centro de Estudios
Desarrollo y Territorio

fundamentales como el respeto al prójimo y la centralidad de las relaciones familiares (en sus distintas configuraciones) que hoy quieren ser mercantilizadas. La idea de que el libre mercado debe regular las relaciones sociales **llega al extremo de plantear “filosóficamente” el comercio entre privados de niños, niñas y bebés**, así como también de órganos. O sea, el tráfico de cuerpos, entre privados y sin regulación.

¿Qué impacto tendría esta visión social, política y económica en los barrios populares de nuestro país?

La desregulación del mercado de trabajo implica necesariamente una presión hacia la baja en el salario: cuantos menos impedimentos haya para ser despedidos, sin fijación de un salario mínimo ni paritarias, no sólo baja el salario de los empleos formales sino también de los informales. Ley de oferta y demanda: se amplía la base de trabajadores disponibles frente a la oferta de empleo, sin costos para el despido ni para la formalización de los trabajadores, el empleador se ve en libre disponibilidad de despedir y contratar nuevo personal. **Es más barato en ese modelo recambiar trabajadores permanentemente que sostenerlos, y, cuantos más trabajadores disponibles haya, más bajo será el salario. Debemos recordar que además ese salario sería devaluado para poder equiparar el valor del dólar con los pesos disponibles.**

La desinversión en políticas sociales, junto a la privatización de la salud y la educación implica que **quienes no puedan pagar, no accedan.** La **eliminación de la obra pública implica que pase a manos de privados la decisión de generar infraestructuras, viviendas y obras de servicios.** Si la lógica de la ganancia es la que convierte en deseables las inversiones, ¿por qué las empresas privadas invertirían de motus propio en obras para población sin capacidad de pago? Las calles, el agua, las cloacas, el gas, la electricidad, las escuelas y hospitales quedarían directamente por fuera de las posibilidades de quienes hoy ya cuentan con un acceso parcialmente limitado.

La eliminación de políticas de género impacta directamente en los hogares pobres, donde su mayoría se encuentran encabezados por mujeres jefas de hogar. Un camino que empezamos a recorrer con más fuerza desde los últimos 4 años, y al que aún le falta mucho, quedaría completamente cancelado.

El transporte, a manos de privados en el caso de los trenes, y sin subsidios, implicaría un impacto directo en los gastos de las familias para el acceso al trabajo, a la educación y a la salud. Quizás vendiendo algún órgano podrían cubrir los pasajes durante unos meses.

Las infancias, con la libre portación de armas y la limitación en el acceso a la educación, sin políticas de prevención del abuso sexual infantil como lo es la Ley de Educación Integral, sin perspectivas de forjar un futuro que no esté atado a las condiciones económicas de la familia en la que nace y con el planteo de reemplazar el sistema de adopción por un mercado libre de comercialización de niños y niñas, sería sin dudas el sector más perjudicado.



CEDYT
Centro de Estudios
Desarrollo y Territorio

Si todo esto resulta escabroso, esto es aún peor ante la promesa de brutal represión ante la protesta social. **Quien quiera protestar deberá pagar el costo: en este caso, palos, balas y cárcel.**

Frente a este oscuro panorama, repudiamos fuertemente las declaraciones y las propuestas de los candidatos de La Libertad Avanza. Creemos que la solidaridad, la convivencia democrática y la justicia social son valores irrenunciables de la sociedad argentina. Tenemos un largo camino por delante y muchas cosas en las que mejorar y crecer, pero dinamitar el país y a nuestro pueblo no puede ser la salida. El estallido económico y político que muchos promueven, no alcanzaría a lo que les gusta llamar “la casta política”, sino a todos y todas las argentinas, y principalmente a quienes menos tienen.

Este domingo tenemos la enorme responsabilidad de votar con una mano en el corazón y los pies en la tierra. No condenemos nuestro destino a partir del enojo, el cuidado de la casa común es responsabilidad de todos y todas.

Centro de Estudios de Desarrollo y Territorio.